

¿ CUAL DEMOCRACIA ?

Luis Razeto Migliaro

1. UNA DEMOCRACIA NUEVA

La pregunta que interroga sobre cuál democracia para América Latina adquiere actualidad hoy que las experiencias de los diversos regímenes militares han entrado en una fase de agotamiento, y se busca y abren los caminos hacia un retorno a la política civil bajo banderas democráticas; proceso éste que ya fue iniciado en algunos importantes países de la región, mientras que en otros el reemplazo de los militares en el poder parece depender, más que de acumulación de fuerzas, de la capacidad de elaboración realista de un modelo alternativo de desarrollo socioeconómico y de un proyecto político de renovación institucional y estatal.

El problema real y actual sintetizado en la pregunta que intitula este ensayo, es más difícil y complejo de cuanto tengan conciencia los políticos que tienen la responsabilidad de enfrentarlo, y es precisamente en la insuficiente comprensión de ello que reside una de las razones que llevan a pensar con no demasiado optimismo el futuro próximo de nuestros países. El muy dramático interrogante que se presenta al respecto es el que se pregunta sobre las condiciones de la estabilidad de los eventuales regímenes democráticos: ¿qué garantiza de que no se tratará una vez más de un intermedio entre autoritarismos militares? ¿Cómo hacer para que los gobiernos que se instauren después de los militares no sean solamente los encargados de enfrentar y administrar las tensiones sociales latentes y las agudas dificultades de economías extremadamente endeudadas con el exterior, después de lo cual las burocracias militares que mientras tanto habrán recompuesto su prestigio y cohesión interna retomarán en las propias manos -con renovadas masivas represiones- la suma de los poderes? Estas dudas son tan reales que de hecho inhiben muchas energías y voluntades de transformación, tanto en los sectores burgueses como en los sectores medios y populares, y quizás más intensamente en estos últimos, que las represiones las han experimentado tan duramente. Por esto, no se puede pensar en una nueva democracia sin reflexionar en profundidad sobre estos interrogantes y proporcionar los elementos que permitan superar tales paralizantes dudas.

Pero no es solo éste el problema que plantea la pregunta sobre cuál democracia para América Latina. Existe además otro nudo problemático por desanudar, y es el de elaborar y construir un sistema político, es decir un complejo de actividades de dirección moral, intelectual, política e institucional, que corresponda y sea la expresión coherente de la historia, la cultura y la composición social de una realidad latinoamericana -y de realidades nacionales particulares- internamente diferenciada y heterogénea y notablemente diferente de aquellas europeas y norteamericanas que han creado los modelos de democracia moderna conocidos, a partir de sus propias historia, cultura y composición social, y que no obstante la fuerza de atracción que ejercen sobre las élites latinoamericanas no pueden ser aplicados ni imitados por nuestros países.

Las dos cuestiones se entrelazan íntimamente, y estoy convencido de que no se puede resolver el problema de la estabilidad de la democracia sino mediante la construcción de un sistema democrático que sea la expresión coherente de la compleja realidad de los países latinoamericanos; no puede haber, en efecto, garantías de estabilidad y continuidad para ningún gobierno que sea y aparezca como "superestructural", o sea que no esté enraizado en la historia y en la cultura de la sociedad y del pueblo. En ello consiste, por lo demás, la democracia misma: en la unidad entre gobernantes y gobernados, esto es en el hecho de que el sistema de dirección esté orgánicamente conectado a la base de los dirigidos, a través de una estructura institucional de participación que canalice los modos de pensar y la voluntad de éstos.

Pero la democracia no es sólo expresión de la realidad existente, sino también y al mismo tiempo proyecto de una realidad nueva, por construir a partir de las potencialidades creadoras de lo que existe; porque la democracia es exactamente lo opuesto al encerrarse en el pasado: es precisamente proceso de transformación, apertura a lo nuevo. Esto es particularmente válido en América Latina, cuyas estructuras sociales se caracterizan por las más agudas desigualdades y contradicciones, el subdesarrollo y la dependencia, y donde las clases populares y los grupos intelectuales expresan fuertes aspiraciones a los cambios estructurales, generando constantemente movimientos de lucha que siguen variadas estrategias y vías, ora revolucionarias ora reformistas.

De esta doble exigencia -solo aparentemente contradictoria- de ser expresión de las propias historias y realidades particulares y proyección de una sociedad nueva, puede surgir la respuesta a la pregunta inicial: ¿Cuál democracia? Un sistema político que sea la expresión de una estructura que quiere cambiarse a sí misma y llegar a ser otra estructura.

Las experiencias vividas por los pueblos bajo los regímenes militares han dado lugar al extenderse de una difusa revalorización de la democracia como sistema político capaz de garantizar la vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de asegurar la participación de los distintos sectores sociales en los procesos de desarrollo, y de crear las condiciones para la integración y la convivencia civil entre las clases y los grupos sociales.

Esta suerte de redescubrimiento de la democracia no s^ólo a nivel intelectual sino también entre los principales grupos sociales y sujetos políticos, es un hecho nuevo de notable importancia. En efecto, en la mayor parte de los países latinoamericanos la democracia estaba desacreditada: por un lado, porque demasiado a menudo las formas "democráticas" han sido instrumentos de dominación oligárquica que excluyen una real participación de los sectores populares; las ideologías dominantes han condenado como "antidemocráticas" las expresiones políticas populares que han intentado integrarse a la vida estatal, mientras no ha habido dictadura que no haya empleado los símbolos y la terminología democrática. Por otro lado, porque los Estados democráticos que habían alcanzado mayor estabilidad y un nivel superior de participación social y política, al final se mostraron incapaces de resolver políticamente y al interior del sistema jurídico vigente los conflictos económicos, sociales, ideológicos que habían experimentado una progresiva agudización, fallando en la tarea de asegurar el necesario orden social, el desarrollo económico y la autonomía nacional, y entraron en crisis de representación. En fin, porque en muchos casos la política democrática estaba deteriorada por difundidas prácticas de populismo, demagogia, transformismo y fraudes electorales. Por todo ello, cuando hoy se "redescubre" la democracia, no se piensa en una especie de retorno al pasado sino en la construcción de una democracia nueva, tanto en las formas como en los contenidos sociales, políticos e ideológicos.

2. UN NUEVO ESTADO

Esto implica problemas difíciles de resolver teóricamente, porque el proyecto de una nueva democracia significa la construcción de un nuevo Estado. El tránsito a la democracia, en efecto, no consiste en la simple sustitución del grupo militar en el poder por parte de políticos civiles representativos y elegidos por el pueblo para "ocupar" un aparato institucional y estatal ya existente: dictadura y democracia no son dos formas de gobierno alternativas de un mismo Estado, sino estructuras estatales distintas. La pregunta sobre cuál democracia nos lleva, pues, a otra interrogante que en realidad la sustituye teóricamente: ¿Cuál Estado para los países latinoamericanos?

Pero, ¿qué significa construir un Estado? ¿Y cómo este proyecto puede ser, desde ahora, iniciado? Para responder estas interrogantes es necesario comprender con rigor científico lo que el Estado es, y ello no sólo al nivel de un concepto general que defina su esencia sino que identifique también los problemas que el Estado debe resolver concretamente en sociedades como las nuestras. Tal comprensión científica del Estado implica -particularmente en América Latina- la superación de las contrapuestas concepciones ideológicas y doctrinarias que lo reducen, las unas a simple aparato de dominación de clase, y las otras a una entidad ética representativa del bien común. El Estado es una organización histórico-política compleja, concreta y en desarrollo, cuya comprensión es una de las tareas más difíciles de la ciencia de la historia y de la política, y cuya construcción práctica es una de las más grandes empresas en que puede comprometerse una sociedad. Sin pretender, pues, desarrollar aquí un análisis adecuado del problema, podemos indicar algunos elementos constitutivos generales que nos permitan prospectar la amplitud del desafío.

El Estado expresa la unidad histórica de un conjunto de clases y grupos sociales, que asumen la dirección del conjunto de la sociedad. El proceso de construcción de un Estado coincide pues con el proceso de unificación de vastos sectores sociales que están en condiciones de conducir de modo estable y eficiente la sociedad toda. En las concretas condiciones latinoamericanas, construir nuevos Estados democráticos implica ante todo configurar un bloque social unitario compuesto por todas las clases y movimientos políticos democráticos.

El proceso de unificación de las clases y grupos sociales que en tal modo pueden llegar a ser dirigentes no es solamente jurídico y político, si bien esto es también parte de la tarea; pero más allá de ello el Estado democrático es una organización cultural a través de la cual es ejercida una eficaz dirección intelectual y moral capaz de suscitar el consenso activo de las multitudes. En este sentido, construir el Estado es desarrollar un conjunto articulado de actividades teóricas y prácticas (elaboración, difusión y organización) capaz de sostener el orden colectivo en base a la cohesión moral de la colectividad.

El proceso de unificación democrática implica, además, la elaboración de un específico personal intelectual, político, militar y administrativo, es decir, de una "clase política" que debería concretamente representar la unidad, cumplir las funciones de dirección, coordinar las actividades económicas, administrativas, educativas, etc.. Dado que el autoritarismo ha significado una verdadera y propia sustitución global de la precedente clase dirigente civil por parte de una burocracia militar y tecnocrática, el proceso de formación de la nueva "categoría de funcionarios de la superestructura" es actividad particularmente prioritaria.

"La fundación de una clase dirigente (o sea de un Estado) equivale a la creación de una Weltanschauung", escribió Gramsci. En efecto, construir un Estado nuevo significa también elaborar y socializar un nuevo sistema de ideas políticas que constituya su contenido ético, porque no se organiza pragmáticamente ni siquiera un partido político. Para ser válida esta elaboración debe satisfacer ciertas condiciones. Naturalmente, deberá tener la capacidad de unificar ideológicamente el mayoritario bloque social en ascensión a la dirección política del Estado, y de guiar coherentemente su actividad; pero no se trata solo de esto, porque el contenido ideal del Estado democrático debe ofrecer un punto de referencia conforme al cual la actividad de todos los grupos sociales y políticos encuentre un encuadramiento aceptable. Si todo esto ha de obtenerse de manera democrática y no impositiva, es decir por la vía del consenso, el nuevo sistema de ideas políticas deberá incluir y organizar coherentemente aquellos elementos que, teniendo su origen y siendo propuestos por distintas fuerzas políticas con diferente orientación ideológica, puedan ser compartidos por el conjunto de las fuerzas democráticas. Ello implica la renovación de cada una de ellas, nuevas elaboraciones autónomas y debates en busca de convergencias. Se tendrá presente que lo que importa no es tanto "la teoría" sino la concreta formación de una nueva conciencia colectiva democrática.

En fin, la construcción de un Estado democrático, precisa

mente en cuanto constituye la unificación de un bloque dirigente en cuanto dirigente, representa y conforma simultáneamente la unidad histórica nacional, en el sentido que organiza las relaciones entre gobernantes y gobernados, entre dirigentes y dirigidos. Esta función unificadora se cumple democráticamente en la medida en que el Estado sea lugar de conflicto, y por lo tanto pluralista. El Estado democrático debe representar el resultado de unas relaciones de fuerza entre los sistemas de acción que se expresan en el terreno privilegiado de la política, allí donde quedan definidas las posiciones -no cristalizadas- de gobierno y oposición.

Todo esto se traduce operativamente en el cumplimiento de funciones públicas específicas, que exigen la posesión de particulares competencias técnicas por parte de los grupos dirigentes, que deben ser sistemáticamente preparadas. Funciones cuales: a) la promoción del desarrollo económico y social equilibrado, lo que supone la elaboración y organización de un proyecto económico nacional en el que se articulen los intereses y las capacidades de los diversos sectores; b) la administración en general de los servicios públicos (educación, justicia, salud, habitat, etc.), que deben ser reorganizados de modo que correspondan a las nuevas orientaciones del Estado y a las reales necesidades de la población; c) la conducción de las relaciones internacionales, de intercambio con el exterior, de alianzas entre Estados y seguridad nacional, esto es, el complejo de las cuestiones implicadas en un proceso de redefinición del puesto de cada país al interior del continente y a nivel mundial.

3. OTRA ESTRUCTURA DE LA POLITICA

Definido el Estado democrático como un conjunto de actividades teóricas y prácticas de dirección y organización política de la sociedad, desplegado no por un grupo particular que concentre los poderes decisionales sino estructurado de manera que los diversos grupos sociales e ideológicos participen en los varios niveles de la toma de decisiones, es decir que intervengan políticamente, se presenta el problema de la política como actividad que puede desenvolverse de distintos modos, ritmos y estructuras, no todos compatibles o correspondientes a la vida democrática del Estado. En realidad, cada tipo de Estado corresponde a un modo de hacer política, o mejor, es una determinada estructura de la acción política. Nuestra pregunta inicial se modifica una vez más: ¿Cuál política?

En América Latina, las sucesivas fases de los Estados oligárquicos, populistas y autoritarios se han caracterizado por diferentes estructuras y modos de desenvolverse de la política, y -con ello- por diferentes sistemas de relaciones entre gobernantes y gobernados. El Estado populista bajo un encuadramiento jurídico-institucional de tipo democrático-representativo (o sea la forma de democracia existente en algunos países antes de la llegada de los regímenes militares), se caracterizaba por una estructura de la política en la que las grandes clases y conglomerados sociales se movilizan alrededor de sus intereses económicos particulares, los que son expresados en términos reivindicativos por determinados partidos que presionan a las instituciones y poderes públicos,

y más específicamente a los gobiernos, los que a su vez componen las diversas demandas en alguna política de redistribución de ingresos y de asignación de recursos, con un sistema de compensaciones de orden político, jurídico, ideológico, etc..

Un cierto equilibrio y estabilidad de esta estructura operó eficazmente hasta que se produjo un cambio acelerado en los comportamientos políticos de determinados sectores sociales, cuyo comienzo lo constituyó la revolución cubana. Esta modificó los términos de la política en toda la región porque mostró que los equilibrios tradicionales que implicaban la subordinación permanente de los sectores populares podían ser trastocados por las clases subalternas en lucha revolucionaria. Aquella revolución no fue conducida por partidos políticos tradicionales, sino que fue el producto de una acelerada movilización de estratos hasta entonces no participantes en la vida estatal, bajo la guía de un grupo de revolucionarios portadores de una voluntad optimista y decidida y de un nuevo método de organización y lucha. El efecto más inmediato de su victoria fue la proliferación en casi todos los países de movimientos revolucionarios que adoptan el modelo guerrillero; la sola presencia de éstos modifica el clima político, no obstante no se produzcan nuevas significativas situaciones revolucionarias. Y el efecto inmediatamente subsiguiente fue la formación de consistentes coaliciones contrarrevolucionarias, que también ellas descartan los métodos y modos de hacer política precedentes, estimulando un proceso también acelerado de politización de las fuerzas armadas. Se verifica así un proceso general de militarización de la política; que rápidamente deja fuera de escena a los partidos centristas y reformistas que persisten en actuar conforme a los cánones políticos tradicionales. Las fuerzas extremas se contraponen siempre más directamente, la política se centra en la fuerza y en la lucha, convirtiéndose el "factor militar" en el elemento inmediatamente decisivo de las relaciones de fuerza. Este cambio en y de la política conduce inevitablemente a la instauración de los nuevos Estados autoritarios con régimen militar.

Puesto así el problema, la cuestión por resolver se refiere a la estructura y el modo de la política constituyente de los nuevos Estados democráticos por construir en los países latinoamericanos. Y aquí, para definir la cuestión, no se trata de soñar e inventar de la nada un nuevo modelo de política perfectamente democrática, sino de observar la realidad concreta de los comportamientos democráticos nuevos emergentes en el pueblo; porque, o la nueva democracia está ya en germinación en la realidad actual, o simplemente no existirá (en cuyo caso el diseño intelectual de ella no sería más que una vacía ejercitación academicista).

Puede surgir a este punto una duda respecto al por qué la democracia nueva no pueda ser implantada desde arriba, vale decir por un grupo político particular portador de un modelo coherentemente elaborado en todas sus partes. En la historia sucede a veces -es por ejemplo el caso de varios socialismos reales- que un grupo organizado de vanguardia toma el poder y reorganiza la sociedad, la economía y las instituciones, conforme a un plan original preestablecido que no corresponde -aunque podría ser incluso éticamente superior- a los deseos y aspiraciones reales del pueblo; pero el hecho es que un tal modo de construc

ción del Estado no es democrático aún cuando el diseño intelectual lo sea, precisamente porque debe ser impuesto, lo que implica constricciones a veces incluso brutales para encauzar y conformar los pensamientos y los comportamientos de los diferentes grupos sociales e ideológicos a las exigencias del modelo en cuestión. El Estado resultante no puede ser sino autoritario, porque resulta constituido por actividades políticas impositivas, y a lo más que puede aspirar es a lograr con el tiempo un conformismo pasivo de las multitudes. He aquí por qué, en realidad, democracia verdadera no ha existido jamás en América Latina, cuyas naciones han sido constituidas desde el poder; en el nacimiento y desarrollo de estos Estados está la autoridad, y es siempre ésta -a través de sus diferentes conformaciones oligárquicas, populistas y autoritarias- que comprime y limita las diversidades sociales, étnicas, culturales, etc. y configura la unidad estatal; en ello reside su inestabilidad, porque las diversidades negadas por la fuerza tienden inevitablemente a reaparecer y reivindicar espacio y autonomía, cuestionando periódicamente el orden constituido.

No es posible desarrollar aquí un estudio particularizado de los nuevos comportamientos democráticos emergentes en el seno del pueblo, y debemos limitarnos a la identificación de algunas líneas de tendencia generales que indican la dirección que quiere seguir la nueva política democrática.

Una primera orientación puede vislumbrarse en el surgimiento y multiplicación de organizaciones y comunidades de base de diferentes tipos, mediante las cuales las personas se proponen enfrentar directamente los problemas (económicos, sociales, ambientales, etc.) y canalizar sus propias inquietudes (religiosas, culturales, de desarrollo humano integral, etc.), en base a los propios recursos y capacidades y mediante la cooperación recíproca y la solidaridad. El modelo organizativo es el de pequeños grupos autónomos y autogestionados, que se relacionan y coordinan entre ellos constituyendo organismos de integración sobre bases geográficas o funcionales que les permitan ampliar su radio de acción y potenciar sus energías transformadoras, llegando progresivamente a la formación de una amplia red de organizaciones sociales. Se va formando así un tejido democrático nuevo, de base, mediante el cual se va superando la atomización y el individualismo inducidos por el poder autoritario, y se supera al mismo tiempo la masificación (pasiva) a la que los mismos individuos anónimos son llevados por el consumismo, la propaganda y la manipulación del poder.

Se ha de subrayar el hecho de que este nuevo tipo de organizaciones y comportamientos democráticos surge como respuesta popular frente a la coersión y a la desmovilización de las precedentes organizaciones populares de masa que actuaban conforme a una lógica reivindicativa y de presión al poder, el cual no se pone ya como interlocutor que recibe y compone políticamente las demandas de los distintos sectores sociales. La negación de la estructura de la política populista, cumplida por el Estado autoritario que quisiera al pueblo pasivo y atomizado, es a su vez negada por el pueblo que se organiza y actúa de modo nuevo. La democracia hacia la que este proceso de base conduce no es, ni aquella de tipo liberal que organiza individuos que actúan según sus intereses particulares, ni aquella colectivista que supone la homogenización de iguales desprovistos de libertad, ni tampoco la moderna democracia de masas hacia la que pare-

cen orientarse las naciones más industrializadas, sino una democracia de participación y solidaridad cuyas células constitutivas elementales son las comunidades organizadas.

Una segunda orientación de la nueva política democrática emergente se puede observar en la exigencia de unidad, que se hace presente en primer lugar a nivel de las organizaciones sociales populares que exigen a las fuerzas políticas progresistas que superen los precedentes sectarismos, dogmatismos, oportunismos de grupo y divisiones varias, y en segundo lugar a nivel nacional en cuanto se ha comprendido que las contraposiciones frontales entre los diferentes frentes sociales y políticos impiden el logro de objetivos nacionales compartidos, como el desarrollo económico-social, la soberanía nacional y la convivencia civil. Política de consenso, búsqueda de convergencia, son las palabras de orden más corrientes. La exigencia y la búsqueda de unidad es un aprendizaje de las lecciones políticas tan duramente enseñadas por los resultados catastróficos a que condujeron los viejos antagonismos de partido y de Estado, y se pone de hecho como un elemento estructurante del nuevo modo de hacer política por parte de los sectores democráticos. Es parte del proceso de superación del paradigma de política basado en la fuerza, la lucha y la contradicción.

Un tercer elemento de la nueva política democrática es la búsqueda de autonomía y alternativa, que se observa claramente en el esfuerzo constante de distinción y separación que hacen las organizaciones y los grupos democráticos respecto a las realidades y esferas de los poderes e instituciones existentes, los portadores de lo nuevo respecto a los viejos modos de pensar y actuar. Una de las manifestaciones de esta orientación es el rechazo de las instrumentalizaciones de todo tipo de que puedan ser objeto las organizaciones, lo que las lleva a menudo, por un lado a una cierta despolitización (en sentido partidista), y por otro lado a la afirmación de los principios de la autogestión. En el mismo sentido se comprende una cierta desconfianza hacia cualquier forma de delegación de poderes decisionales y de formación de grupos dirigentes separados de las bases, de los cuales se critica la "burocratización". En el trasfondo de esta tendencia a la autonomía y la alternativa, puede percibirse la voluntad y el proceso de formación de nuevos grupos dirigentes e intelectuales, que surjan desde las comunidades y organizaciones de base como sus nuevos representantes orgánicos.

En la difusión de este nuevo modo de acción transformadora, a través de cuyo despliegue puede configurarse una democracia nueva en los países latinoamericanos, se ha de reconocer un rol importante a la acción de la Iglesia Católica, que ha querido y sabido ponerse al servicio de los oprimidos como voz de los que han sido callados y como expresión de las esperanzas de liberación y transformación; pero no sólo de la Iglesia, en cuanto también actúan en el mismo sentido aquellos grupos intelectuales y políticos que a partir de las precedentes derrotas se han renovado en sus modos de pensar y actuar y se han reinsertado en el seno del pueblo experimentando una renovada dialéctica de aprendizaje y enseñanza.

4. UN PROCESO DE DESMILITARIZACION DE LA POLITICA Y DE LOS ESTADOS

A este punto una pregunta y una duda apremian el análisis. ¿Podrá, y cómo, esta nueva política, reemplazar a aquella dominante militarizada? Es evidente que no se puede pensar en una democracia y en un nuevo Estado mientras el proceso de militarización de la política no sea sustancialmente revertido y derrotados sus promotores.

La primera cosa que al respecto puede decirse es que la superación del militarismo no puede ser obra de luchas militarmente conducidas, ni de una acción política fundada en la violencia y la fuerza de las armas; el elemento militar es el factor inmediatamente decisivo de las relaciones de fuerza allí donde la estructura de la política es aquella propia de Estados autoritarios, pero un cambio de estas relaciones de fuerza, aún en el caso de que sea favorable a un nuevo bloque social, no da lugar a un sistema político democrático sino solamente a un nuevo autoritarismo. Por lo demás, la experiencia demuestra que las fuerzas armadas en el poder resultan ideológicamente "legitimadas" por la emergencia de grupos antagonistas que adoptan una vía de lucha armada para el ascenso revolucionario al poder.

Allí donde se confrontan militarmente organizaciones revolucionarias de lucha armada con los cuerpos especiales de represión estatal, en una guerra subterránea que se desenvuelve desde ambos bandos fuera de toda legalidad, lo que generalmente sucede es la pasividad política de las multitudes que se convierten en público atemorizado que se limita a observar y esperar los resultados de la confrontación. Cuba y Nicaragua no pueden considerarse como ejemplos de lo contrario, ya que aquellos procesos representaron la rebelión de las masas y de los más variados grupos sociales frente a poderes autárquicos tradicionales, en sociedades que no habían alcanzado todavía una organización nacional y estatal moderna.

La superación de los Estados autoritarios y la desmilitarización de la política pasa por la formación y desarrollo -fuera del Estado actual y emergiendo desde la base- de un nuevo sistema orgánico de acción transformadora, portador de una nueva estructura de la política fundada sobre la no-violencia. Tal nueva política crece -por así decir- al lado y fuera del radio de acción de la política oficial y sus relaciones de fuerza, pero interviniendo activamente en la vida de la sociedad civil, transformando ésta en sentido democrático, creando la sociedad civil del nuevo Estado democrático.

La desmilitarización de la política implica no sólo el surgimiento de una nueva política civil sino también la actuación de un proceso de despolitización de las fuerzas armadas. El contenido esencial de tal proceso es la reversión del proceso anterior de politización, y consiste fundamentalmente en la subordinación estructural de fuerzas armadas profesionales a los poderes políticos y gubernamentales civiles. Punto de partida de este proceso -que ya se ha iniciado en algunos países de la región- parece ser la demostración histórica del fracaso de los regímenes militares en la obra de superación de la crisis económica, social y política de los Estados, y de desarrollo y modernización. Pero estoy convencido de que tal reversión no será definitiva y sin vuelta atrás.

si no se verifica un real y sustancial redimensionamiento de las fuerzas armadas mismas, que en los últimos años han crecido inmoderadamente.

Una reducción significativa de las fuerzas armadas es posible si se tiene en cuenta que los países latinoamericanos juegan un rol marginal en las alianzas militares mundiales. La justificación de la adquisición de armas cada vez más modernas y de la mantención de ejércitos numerosos se encuentra en la búsqueda de equilibrios intraregionales, puestos en discusión por la existencia de nacionalismos exacerbados ideológicamente (en ausencia de conflictos sustanciales profundos; de hecho, de todas las regiones del mundo la latinoamericana es la única que desde hace un siglo no ha vivido reales y verdaderas guerras entre Estados).

La reducción de las fuerzas armadas nacionales requiere, pues, la superación de los nacionalismos y la actuación de un proceso de integración latinoamericana. Ambas cosas son, por lo demás, exigencias económicas de estos países, de lo que hay cada vez más clara conciencia. Por una parte, debido a que el armamentismo y los ejércitos ocupan una cuota excesivamente grande de los ingresos y recursos nacionales, que se sustraen al desarrollo económico en cuanto la mayor parte de las armas son adquiridas fuera de la región; por otra parte, porque la necesaria apertura a la economía internacional no puede ser realizada en términos competitivos y convenientes -sin crear aún más dependencia- en base a políticas aisladamente nacionales; la reinserción en el mercado mundial en condiciones adecuadas implica inversiones y tecnologías que no pueden ser sostenidas sino por un mercado latinoamericano integrado, es decir, de dimensiones muchísimo más extensas que las que tienen los Estados separados.

5. HACIA UNA NUEVA CIVILIZACION LATINOAMERICANA

El modo en que hemos enfocado el problema, que nos ha llevado desde la cuestión de la democracia a la del Estado, y de ésta a la de la política, nos pone decididamente en la perspectiva de una acción histórico-política de largo plazo, en la cual las actividades a desarrollar en el presente adquieren su pleno significado en un proyecto cuyos objetivos no pueden ser alcanzados en breve tiempo sino a través de un proceso prolongado. Este modo de enfrentar la cuestión democrática en América Latina no es -nos parece haberlo demostrando- el resultado de opciones intelectuales y políticas arbitrarias sino una exigencia interna del proceso mismo. Es ilusorio pensar en una verdadera democracia estable a corto plazo, aún cuando puedan tener -y lo tienen ciertamente- valor e importancia, como momentos del proceso de transición, acontecimientos políticos que impliquen la sustitución de los actuales regímenes autoritarios por parte de sistemas y métodos de gobierno en los que la política civil y los partidos jueguen un papel relevante.

El carácter no coyuntural sino histórico y orgánico de la crisis de la sociedad y de los Estados latinoamericanos, implica la adopción de un punto de vista histórico y epocal, sea para comprender los problemas reales y actuales como para proyectar su superación. La crisis latinoamericana es

la crisis de una civilización, crisis de la que no se sale realmente más que mediante la progresiva construcción de una civilización nueva. Nuestra pregunta inicial se transforma de nuevo: ¿Cuál civilización para América Latina?

Al plantear la cuestión en términos de civilización, queremos recoger y llevar a unidad y coherencia un conjunto de temas y perspectivas que han interesado desde siempre a la cultura latinoamericana, y relacionarlas con las inquietudes políticas más cercanas; de ello puede surgir quizás un esquema de "gran política", de la que ciertamente no pretendemos aquí más que indicar algunas cuestiones y temas principales.

La primera cuestión, que encierra la problemática cultural y política fundamental de América Latina, recurrente en el pensamiento filosófico y en la investigación histórica y social, en las artes y en la literatura del subcontinente, es la de la identidad latinoamericana, cuya expresión política principal es la búsqueda de la autonomía y la independencia económica, política y cultural respecto de toda dominación e imperialismo. La cuestión incluye numerosos aspectos: el contenido y las formas del sistema institucional propio, la dirección que se ha de dar al desarrollo económico y social, la búsqueda de una nueva ubicación en el concierto mundial de las naciones y de las civilizaciones regionales contemporáneas, el desarrollo de una cultura capaz de integrar los componentes heterogéneos de esta estructura etno-demográfica compuesta, etc..

Pero el centro de la cuestión, tradicionalmente planteada en términos de ruptura de los vínculos históricos y estructurales de dependencia y subordinación a los imperialismos, puede ser reelaborado en positivo como búsqueda de una forma integradora a nivel latinoamericano: elaboración teórica y práctica de un sistema propio de significados, que otorgue un sentido unificado, una estructura orgánica y una dirección de desarrollo coherente, al conjunto de las actividades económicas, políticas y culturales, precisamente en la perspectiva de una nueva civilización latinoamericana.

La reformulación del problema de la identidad y la autonomía latinoamericana en términos de "búsqueda de una forma" hace posible, nos parece, conjugar exigencias diversas: en primer lugar la de vincular la conquista de la independencia económica y política con el problema de la integración latinoamericana, que se presentan actualmente como recíprocamente condicionadas; en segundo lugar la de articular las luchas contra las dominaciones extranjeras con la búsqueda en positivo de una civilización autónoma que exprese los propios valores; por último la de unificar en una coherente perspectiva teórica el análisis científico de la región con la elaboración política de un proyecto de acción: la identidad latinoamericana se presenta como algo que buscar y construir a partir de la historia y de la estructura existente a través de iniciativas transformadoras.

No podemos aquí adelantar hipótesis de contenido referentes a la elaboración concreta de esta identidad latinoamericana integradora; nos limitamos a indicar solamente un elemento de método respecto de la cuestión central involucrada, a saber la superación de los nacionalismos y la integración entre los Estados. Esta indicación de método es, en lo esencial, que la búsqueda

de la forma latinoamericana debe proceder no en contraposición respecto a las unidades nacionales dadas, sino conforme a una lógica de búsqueda completamente diferente de aquella que fue seguida para la construcción de la forma Estatal-nacional en cada país. Lógica de elaboración de la forma unificante, diferente por tres aspectos principales:

A diferencia de las unidades estatal-nacionales que se construyeron a través de la afirmación de la unidad a pesar de las diferencias, o sea a través de un proceso de ocultamiento y negación de las particularidades económicas, étnicas, culturales, etc. existentes, la unidad latinoamericana deberá ser buscada en cambio, y construida mediante un proceso de recuperación de todas las diferenciaciones y de toda la complejidad, el pluralismo y la pluriestructuralidad existente. La integración deberá ser tal que no niegue las actuales distinciones nacionales, sino que incluso debiera recuperar aquellas diferenciaciones existentes al interior de cada nación y que han sido olvidadas pero no eliminadas por los nacionalismos predominantes. Es precisamente esta riqueza compuesta la que debe ser llevada a unidad y coherencia mediante una compleja elaboración teórico-práctica de una forma integradora simple y al mismo tiempo capaz de sintetizar en sí la multiplicidad de los propios contenidos histórico-culturales.

Una segunda diferencia en la lógica de elaboración de la forma latinoamericana respecto de la que caracterizó la construcción de los Estados nacionales después de la Colonia consiste en esto: que mientras en aquel caso no era posible mirar el pasado y las tradiciones para encontrar la propia identidad, siendo las entidades nacionales algo totalmente nuevo por inventar (con el resultado de que prevaleció la imitación de las formas europeas y norteamericanas), la forma integradora latinoamericana podrá ser individuada y construida precisamente mediante una reinterpretación de la historia precedente: encontrar la propia identidad revisitando con el intelecto y recuperando en la conciencia y en la voluntad colectiva la historia de la formación latinoamericana y de sus indómitas luchas de liberación y transformación.

Una tercera diferencia se refiere al modo de alcanzar la institucionalización y de iniciar la conformación de las personas y los grupos al nuevo sistema ético-político. Los Estados nacionales fueron inaugurados mediante un acto central de tipo jurídico, consistente en la formación de un gobierno central y en la promulgación de una constitución y de cuerpos legales a los que debían conformarse en adelante los comportamientos y las actividades. La forma integradora latinoamericana, si bien no ha de renunciar la oportunidad de determinados actos de tipo jurídicos organizados desde arriba -pero precisamente debido a las dificultades para la realización de ellos- podrá organizarse, adquirir sustancia y contenidos, y configurarse prácticamente, a partir de abajo, o sea a través de un proceso prolongado y multiforme de unificación social, cultural y política protagonizado por las comunidades y los grupos sociales que han llegado a ser los nuevos sujetos de la acción histórica. Un proceso de latinoamericanización de la política de hecho está latente en la nueva estructura de la actividad democrática emergente: solo latente, porque las relaciones entre las comunidades y grupos de los distintos países no han encontrado aún eficaces modos de activar-

se; pero real, siendo notable la semejanza en los modos de organización y en las formas de pensar y actuar.

De las cuestiones de forma y de método referidas a la superación de los nacionalismos y a la iniciación de la integración latinoamericana, pasemos a una última cuestión que vincula aún más estrechamente la perspectiva de una nueva civilización con el problema de la democracia. La cuestión se refiere a las relaciones entre economía y política, tema central tanto del problema democrático como del proyecto de civilización.

En efecto, uno de los elementos constitutivos de una civilización es el logro y la consolidación histórica de una coherencia estructural entre economía, política y cultura, es decir de un ordenamiento equilibrado de las actividades productivas, directivas y creativas (mientras la crisis de civilización puede precisamente ser definida como el proceso de separación y desarticulación entre "estructura" y "superestructura"). Y no puede haber democracia estable donde subsista una estructura económica oligárquica, un mercado que concentra en pocos grupos los recursos y riquezas y excluye a las grandes masas de los beneficios del desarrollo. El análisis de las dificultades y de las crisis de los precedentes Estados democráticos en América Latina pone en evidencia que un problema de fondo reside en la estructura económica, y concretamente en la configuración no-democrática del mercado, sea porque el predominio del capital ha impedido la universalización de las libertades económicas y políticas y llevado a la masificación subordinada de grandes sectores sociales, sea porque el poder público —especialmente en los Estados populistas y autoritarios— ha ampliado excesivamente su propio radio de acción limitando el despliegue de las libertades e iniciativas individuales.

Condición, pues, de un Estado democrático parece ser la conformación democrática del mercado. Las experiencias cooperativas y autogestorias muestran que el funcionamiento de un libre mercado no-capitalista es posible, e indican una dirección de búsqueda; pero las limitaciones que han manifestado estas mismas experiencias plantean la necesidad de nuevas elaboraciones teóricas y prácticas.

En estrecha relación con esto, se presenta la importancia de afirmar teórica y prácticamente la autonomía de la sociedad civil (o sea, del conjunto de las actividades económicas, sociales y culturales "privadas") respecto de la sociedad política (especialmente el sistema de poder central). Tal autonomía no consiste en la definición de normas jurídicas y constitucionales "garantistas"; no se trata, en efecto, de un problema de forma sino de contenidos. Se trata de transformar y estructurar la sociedad civil sobre nuevos principios y valores, abriendo y ampliando los espacios de autonomía económica, política y cultural no sólo para los individuos sino también para las comunidades y grupos organizados, intermedios y de base.

Requisito de la autonomía de la sociedad civil dadas las condiciones actuales, de la existencia y desarrollo de nuevos espacios para las iniciativas económicas, políticas y culturales autónomas, son la reducción del

tamaño del Estado y la contención del poder político. Ciertamente, si la reducción del Estado es entendida en el sentido neoliberal, como simple reafirmación del "libre mercado" y como liberación de las actividades capitalistas de todo control social y público, es más que probable que el resultado no sea otro que la acentuación de la crisis actual y de las desigualdades; tal reducción de la intervención estatal en la economía se traduce además en la ampliación de las funciones estatales de control y represión del pueblo.

Hay sin embargo un elemento de racionalidad en las ya fallidas ideologías neoliberales que acompañan a nivel económico las políticas autoritarias. Existen, en efecto, tendencias progresistas que expresan la necesidad de avanzar hacia una superación de la estadolatría que ha caracterizado el pensamiento de la mayoría de los intelectuales y dirigentes políticos latinoamericanos del presente siglo. Las soluciones que se ha propuesto desde principios de siglo para hacer frente a las diferentes manifestaciones de la escisión entre sociedad civil y sociedad política, han estado en verdad dominadas por la tendencia a la absorción de la sociedad civil por la sociedad política, con la consiguiente hipertrofia del Estado y de las burocracias.

La construcción de una nueva democracia y de sociedades "a medida humana" parece en cambio exigir, hoy, un proceso inverso, de progresiva reabsorción de la sociedad política en la sociedad civil; un proceso a través del cual los individuos y organizaciones de base e intermedias retomen actividades, iniciativas, derechos y decisiones que han estado concentradas en el Estado y burocratizadas. Dicho proceso no significa la despolitización de las personas y asociaciones sino, por el contrario, un proceso de socialización de la política: el fin de la concentración de los poderes y la construcción de nuevas relaciones entre dirigentes y dirigidos.